



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

Quilmes, 28 de junio de 2024.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el marco de los presentes actuados FLP 48773/2019 en trámite ante la Secretaría Penal n° 4 de este Juzgado Federal, respecto del planteo de falta de acción intentado por los Dres. Matías Ledesma y Esteban Daniel Semachowicz y suspensión de la acción penal.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que los Dres. Matías Ledesma por parte de la imputada Baldivieso y el Dr. Semachowich respecto del imputado Daniel Hector Rusiani, solicitaron al Tribunal se haga lugar a la excepción de falta de acción y la suspensión de la acción penal respecto de sus pupilos.

En tal sentido, cuestionaron los argumentos incriminatorios que fueran mencionados por la titular de la vindicta pública y la Afip al momento de valorar los elementos de prueba recabados en los actuados.

Así las cosas, previo a resolver al respecto y atento el estado de trámite de la causa, se dispuso a la Afip que lleve a cabo la verificación al contribuyente CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE TRABAJO LIMITADA, CUIT Nro. 30- 711226679, tendiente a establecer si el mencionado adquirió los materiales utilizados para la construcción de las 91 viviendas en la localidad de Miraflores, Pcia de Chaco, a otro proveedor que no sea BALDIVIESO, como así también, se solicitó al Ministerio de Desarrollo Social informe si la Cooperativa señalada forma parte de un plan de licitaciones con dicho Ministerio, debiendo en su caso, especificar los períodos, contrato, función, y destino, cuyos resultados fueron incorporados al expediente digital a fs. 1128/1231 y 1240/1268.

Que corrida vista a la Sra. Fiscal Federal respecto de los planteos formulados, postuló su rechazo.

Específicamente, **respecto del planteo de falta de acción**, sostuvo que el artículo 339 del CPPN contempla la posibilidad de que las partes, durante la instrucción, puedan interponer una excepción de previo y especial pronunciamiento en aquellos supuestos en los cuales se advierta que la acción no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no pudiere ser proseguida,



#33862837#417774850#20240628121339013

o estuviere extinguida- (cfr. art. 339 CPPN, 2º párr.). Mencionó que, la jurisprudencia ha aceptado que pueda procederse cuando la inexistencia del delito sea evidente.

Asimismo, mencionó que La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ha establecido que la excepción sólo procede cuando de la descripción de los hechos imputados o del examen de las actuaciones, surja palmaria y evidentemente la ausencia de encuadre típico de los mismos, constituyendo la prosecución del proceso un claro dispendio de la actividad jurisdiccional (conf. CNCP, Sala II Causa N° 1780 Bressi, Roberto Eduardo y otro s/rec. De casación, Reg. N° 2213, rta. El 6/10/1998; y Sala IV Causa N° 1500 _De Tezanos Pinto, Manuel S/rec. De casación, Reg. N° 2459 del 6/3/2000) (CNCP, Sala III, causa nro. 5292 —Wurzel, Nélica Sofía s/rec. de casación, reg. 711/04 del 23/11/04), circunstancias que no se dan en el caso en estudio. Al respecto, D´Albora explica que “...en general, tanto la jurisprudencia como la doctrina se muestran adversas a admitir que se aduzca la inexistencia de delito por vía de la falta de acción..., salvo que dicha inexistencia surja con toda evidencia del acto promotor o de lo actuado...” (Cfr. D´Albora, F.: La inexistencia de delito como excepción no legislada, E.D. 1987, Tº 121, p. 975). Al comentar el artículo 339 del CPPN el autor advierte que “cabría añadir dentro de este género, la inexistencia de delito cuando resulte manifiesta de la mera descripción efectuada en el acto promotor (artículos 188, inciso.2º y 195) y el juez no hubiese rechazado el requerimiento fiscal tempestivamente” (D´Albora, F. Código Procesal Penal de la Nación, Abeledo- Perrot, Bs. As., 1993, pp. 329/330; ed. de 1997, pp. 585/586 —el resaltado nos pertenece-).

En base en ello, como de los elementos de prueba acorallados a la investigación: dictamen del 5/09/2019, los diversos informes solicitados y confeccionados por el ente recaudador y demás informes, como las testimoniales recibidas y finalmente el pedido de indagatoria petitionado por la parte querellante —AFIP- y el realizado por el Ministerio Público Fiscal de de fecha 9/05/2024 los que grafican y evidencian que los hechos ilícitos endilgados a los encartados, se encuentran detallados en forma clara, precisa y circunstanciada, como así también, encuadradas dentro de diversas figuras ilícitas conforme el accionar ilícito llevado a cabo por aquéllos, sostuvo que no corresponde hacer lugar a la excepción aquí planteada.

Asimismo, expuso que a partir del avance investigativo los encartados en forma conjunta y coordinada conformaron la verificación





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

realizada por Afip mediante Planes de Pago nros. Q112149 (Ana María Baldivioso) y Q232237 (Daniel Hector Rusiani en representación de RH en representación de RH Guarda y Revestimientos Artísticos SRL), circunstancia que sustenta aún más la hipótesis delictiva endilgada, al dar cuenta que conforman un grupo económico, que evidentemente se valieron del contribuyente Baldivieso para intentar defraudar al fisco nacional. Así, advirtió que, no debe perderse de vista que la defensa omite fundar siquiera mínimamente algún menoscabo en los derechos protegidos por la Constitución Nacional; por el contrario, su planteo se sustenta en cuestiones valorativas -de carácter subjetivo- de la prueba recabada durante la sustanciación de la investigación, que intenta ahora desvirtuar por medio de una interpretación personal de aquélla y que se sustenta mayormente en la conformación de la deuda verificada por la AFIP y los planes de facilidades de pago a los cuales se acogieron para hacer frente a la deuda tributaria exigida por el organismo recaudador.

Con respecto a la suspensión de la acción formulada por los encartados, indicó que éste carecería de sustento legal para su aplicación, dado que la figura endilgada tipificada en el art. 15, inciso “b” de la ley 27430 impide su aplicación.

Así, indicó que el artículo 16 de la ley 27430, es claro y preciso, respecto a qué acciones ilícitas tributarias son susceptibles de suspensión de la acción penal, al estipular que: *“En los casos previstos en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 6º la acción penal se extinguirá, si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los treinta (30) días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula. Para el caso, la Administración Tributaria estará dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia. Este beneficio de extinción se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada”*.

En el caso, según resultó acreditado en la causa principal, los sindicatos realizaron personalmente las conductas reprochables de manera conjunta y tuvieron el dominio del hecho por tener en todo momento dominio de la acción, que se vio reflejado en un plan o decisión común.

Tales circunstancias, indicó la titular de la vindicta pública permiten aseverar que las afirmaciones vertidas por la defensa carecen de sustento y que



no se presenta ni acredita en el caso de autos, la existencia de un perjuicio real y concreto, por lo que corresponde descartar las alegaciones formuladas en este sentido por los Dres. Matías LEDESMA y Esteban Daniel SEMACHOWICZ.

TERCERO:

En este estado de cosas y llegado el momento de expedirme, adelanto que comparto el criterio de la Sra. Fiscal Federal respecto a que sean rechazadas las peticiones de la defensa de Ana María Baldivieso y Daniel Hector Rusiani

Referente la solicitud de falta de acción, viene al caso señalar que es claro el artículo 339 del CPPN que contempla en qué casos es viable dicha petición y conforme surge de la lectura de las actuaciones no se da ninguna de las circunstancias previstas, estas son: que la acción no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no pudiere ser proseguida, o estuviere extinguida (cfr. 2º parr. art. 339 CPPN)

Por el contrario, surge de manera palmaria en el cauce investigativo a partir de la denuncia de Afip, el requerimiento fiscal de instrucción (de fecha 5/09/2019), los informes peticionados y confeccionados por el ente recaudador, como las testimoniales del personal de Afip que intervino en las ordenes de intervención ordenadas en autos, los pedidos de indagatoria formulados por la parte querellante y el Ministerio Publico Fiscal (de fecha 9/5/2024) acerca de los hechos ilícitos que le son endilgados a los encartados: **Ana María Baldivieso, Daniel Héctor Rusiani y Juan Carlos Rusiani**, quienes concurrieron en forma conjunta en la emisión de facturas apócrifas a nombre de la contribuyente Ana María Baldivieso -Declarada USINA SIN CAPACIDAD OPERATIVA, ECONÓMICA Y/O FINANCIERA desde el 4/9/2014 por la AFIP- destinadas en su totalidad a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltd. (CUIT n°30-71122667-9), con el fin de que esta última evada los siguientes impuestos nacionales: 1) Ganancias 2015 por la suma de \$ 5.189.543,50; 2) Ganancias 2016: \$ 6.326.390,82; 3) Salidas No Documentas 03/2015 al 5/2015 y 4) Salidas No Documentadas 07/2015 al 05/2016: \$7.749.085,89; en infracción a los artículos 2, inciso “d” y 15 inciso “b” de la ley 24.730 (evasión agravado por el uso de factura apócrifas y por ser más de dos personas).

Asimismo, no puede pasar inadvertido conforme mencionó la Sra. Fiscal Federal que, los encartados en forma conjunta y coordinada conformaron la verificación realizada por AFIP mediante Planes de Pago Nros. Q112149 (Ana María Baldivieso) y Q232237 (Daniel Hector Rusiani en representación de RH





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES

en representación de RH Guarda y Revestimientos Artísticos SRL), circunstancia que sustenta aún más la hipótesis delictiva endilgada, al dar cuenta que conforman un grupo económico, que evidentemente se valieron del contribuyente Baldivieso para intentar defraudar al fisco nacional y que los hechos investigados y por los cuales se les recibirá declaración indagatoria, se encuentran descriptos en forma clara, precisa y circunstanciada, como así también, encuadrados dentro de diversas figuras ilícitas conforme el accionar ilícito cometido, no dando lugar a la excepción planteada.

Si bien la jurisprudencia ha aceptado que pueda procederse por esta vía cuando la inexistencia del delito sea evidente y así también lo ha hecho la doctrina, los fundamentos de esta admisibilidad excepcional se encuentran establecidos con claridad en el siguiente párrafo: —"Si bien es jurisprudencia reiterada que la excepción de falta de acción no puede basarse, en principio, en la discusión acerca de la existencia del hecho o su carácter delictivo -por cuanto ello hace, en esencia, a cuestiones de fondo sobre las que debe versar la resolución final del proceso- tampoco lo es menos que, en ciertos casos muy particulares (...) ese criterio ha sido dejado de lado en salvaguarda de los fines superiores de la Justicia admitiéndose la viabilidad de ese tipo de excepciones cuando es patente que el hecho imputado no ha sido cometido o su naturaleza es indiscutiblemente extraña a las previsiones de la ley penal (CNCC, Sala II, 14/11/67, —Porcel de Peralta, Enrique Al, L.L. t. 129, p. 511 – resaltado propio-). En el mismo orden de ideas, se ha dicho que si bien —tal excepción no resulta ser el medio habitual para declarar la inexistencia del delito investigado (...) esta negativa no puede ser absoluta y debe ceder cuando, del examen de las actuaciones, surge con toda evidencia la ausencia del encuadramiento de los hechos en las figuras penales determinadas por tal requerimiento, para evitar, de este modo, la inútil prosecución del proceso que sólo trasuntaría un dispendio de la actividad jurisdiccional que puede y debe ser evitado, lo cual no se vé reflejado en la investigación de marras.

Ahora bien, conforme lo expuesto por la titular a la vindicta publica en el dictamen que antecede, analizado el planteo de suspensión de la acción formulada por la defensa, adelanto que no corresponde hacer lugar en el presente caso, dado que los hechos investigados en autos, esto es evasión agravado por el uso de factura apócrifas y por ser más de dos personas contemplado en los artículos 2, inciso "d" y 15 inciso "b" de la ley 24.730, y el Regimen Penal Tributario contempla una norma concreta que regula la



suspensión de la acción acción penal, limitada sólo para algunas de las figuras delictivas. Así, lo normado en el artículo 16 del Regimen Penal Tributario especifica los delitos Tributarios que pueden acceder a este instituto (arts. 1,2,3,5 y 6 de la ley 27430), quedando fuera del alcance de esta posibilidad, el delito investigado que se reprocha a Ana María Baldivieso, Daniel Héctor Rusiani y Juan Carlos Rusiani.

Por todos los fundamentos expuestos en la presente resolución, de conformidad con las normas legales citadas anteriormente, y en concordancia con lo precedentemente sugerido por la Titular de la Vindicta Pública es que;

RESUELVO:

I).- NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE FALTA DE ACCION formulado por los Dres. Matías Ledesma y Esteban Daniel Semachowicz, en razón de los argumentos detallados en los considerandos.

II) NO HACER LUGAR a la suspensión de la acción penal (“a contrario sensu” art. 16 de la Ley 27430.

III) Notificar a las partes.

Ante mí:

En igual fecha se libró cédula electrónica a las partes. CONSTE.-

